



Asamblea General

Distr. general
13 de junio de 2012

Original: español

Consejo de Derechos Humanos
Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 62.º período de sesiones (16 a 25 de noviembre de 2011)

N.º 67/2011 (México)

Comunicación dirigida al Gobierno el 9 de septiembre de 2011

Relativa a: Sr. Israel Arzate Meléndez

El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, desde el 23 de marzo de 1981.

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido por la antigua Comisión de Derechos Humanos mediante su resolución 1991/42. El mandato del Grupo de Trabajo fue aclarado y prorrogado por la Comisión en su resolución 1997/50. El Consejo de Derechos Humanos asumió el mandato en su decisión 2006/102 y lo prorrogó por tres años mediante su resolución 15/18 de 30 de septiembre de 2010. Actuando de conformidad con sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo transmitió la mencionada comunicación al Gobierno.
2. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:
 - a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en detención de una persona tras haber cumplido la condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);
 - b) Cuando la privación de libertad resulta de un enjuiciamiento o una condena por el ejercicio de derechos o libertades proclamados en los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y, además, respecto de los Estados Partes, en los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);
 - c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, enunciadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los pertinentes instrumentos internacionales aceptados por los Estados interesados es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad un carácter arbitrario (categoría III);

d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de recurso administrativo y judicial (categoría IV);

e) Cuando la privación de la libertad constituye una violación del derecho internacional por motivos de discriminación basada en el nacimiento; el origen nacional, étnico o social; el idioma; la religión; la condición económica; la opinión política o de otra índole; el género; la orientación sexual; la discapacidad u otra condición, y tiene por objeto hacer caso omiso de la igualdad de derechos humanos o puede causar ese resultado (categoría V).

3. El Grupo de Trabajo lamenta la falta de respuesta del Gobierno a la comunicación que se le dirigió, por lo que el Grupo de Trabajo deberá adoptar su Opinión con los antecedentes proporcionados por la fuente.

Presentaciones

Comunicación de la fuente

4. El Sr. Israel Arzate Meléndez, nacido el 8 de mayo de 1985; ciudadano mexicano; dedicado a la venta de discos; residente en Ciudad Juárez (Estado de Chihuahua), fue arrestado el 3 de febrero de 2010 a las 19 horas en el cruce de las calles Melón y Centeno de Ciudad Juárez por miembros del Ejército, mientras caminaba hacia su domicilio desde su centro de trabajo situado en las afueras de la plaza Coral. Los soldados le preguntaron si él era un tal “Carlos Madrigal”. Al negarlo, fue subido a una camioneta, donde le vendaron los ojos.

5. Tanto durante su traslado al 20.º Regimiento de Caballería Motorizada del Ejército como en las instalaciones de éste, Arzate Meléndez recibió golpes y choques eléctricos tanto en el pecho como en el abdomen. Además se le desnudó; se le ató de pies y manos; se le golpeó en las piernas y se le colocó, en varias ocasiones, una bolsa de plástico en la cabeza, provocándole asfixia y pérdida del conocimiento. Como justificación de su detención se le acusó de estar en posesión de una camioneta tipo Jeep cuyo robo había sido denunciado. Un soldado le amenazó diciéndole que podría ser ejecutado extrajudicialmente sin mayores consecuencias para el ejército y que su esposa podría también ser detenida, violada, ejecutada y su cadáver arrojado en un baldío. La familia de Arzate Meléndez no fue informada de su detención.

6. Veintiocho horas después de su aprehensión, a las 23.45 horas del 4 de febrero de 2010, Arzate Meléndez fue presentado por los efectivos militares ante el Ministerio Público. Los militares informaron —según la fuente, sin prueba alguna y falsamente— que había sido detenido en flagrancia. De forma irregular, quedó bajo custodia de las Fuerzas Armadas en las instalaciones de dicha guarnición militar.

7. El 30 de enero de 2010 había tenido lugar en Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez, un homicidio múltiple cuyas 15 víctimas fueron principalmente jóvenes. El 5 de febrero de 2010, luego de sufrir amenazas y torturas, Arzate Meléndez se autoincriminó por dicho homicidio múltiple, durante una diligencia ministerial. El Ministerio Público calificó entonces su detención como legal.

8. Al día siguiente, Arzate Meléndez fue presentado ante los medios de comunicación como uno de los autores de la masacre de Villas de Salvárcar. Fue recién entonces que sus familiares se enteraron de que estaba detenido.

9. El 7 de febrero de 2010 se impuso a Arzate Meléndez la medida cautelar de prisión preventiva. Fue imputado por los delitos de homicidio calificado de 15 personas y de tentativa de homicidio de otras 10 personas. El 10 de febrero se le trasladó del Centro de

Rehabilitación Social (CERESO) nuevamente a la instalación militar. Se le vinculó entonces al delito de robo de auto en un proceso en ausencia.

10. El 2 de junio de 2010, el Ministerio Público informó al juez que desistía de su acusación de robo de vehículo por falta de pruebas. Sin embargo al día siguiente, de manera inexplicable, el Ministerio Público se retractó de su desistimiento. Un recurso de amparo (recurso 97/2011) contra el auto de vinculación a proceso por el delito de robo de auto fue denegado el 11 de julio de 2011 por el Juez Sexto de Distrito del Estado de Chihuahua. El 2 de agosto de 2011 se interpuso recurso de revisión contra dicha denegatoria de amparo ante el Tribunal Colegiado del 17.º Circuito.

11. El 11 de febrero de 2010, la Jueza de Garantía del Distrito Judicial, Sra. Bravos Anabel Chumacero Corral, dictó auto de vinculación a proceso en contra de Arzate Meléndez por los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa de 15 y 10 personas, respectivamente. Decretó asimismo la sujeción de esta persona a prisión preventiva en tanto se realizaba una investigación profunda de su posible participación en el homicidio múltiple cometido el 30 de enero de 2010 en Villas de Salvárcar.

12. Según la fuente, la Jueza de Garantía habría realizado una deficiente revisión judicial de las pruebas recabadas en contra de Arzate Meléndez, que consistían simplemente en una confesión falsa arrancada bajo tortura. La Jueza de Garantía se limitó a realizar un listado de los datos que fueron mencionados por la Fiscalía, pero evitó hacer una ponderación sobre la calidad de cada uno de estos elementos y sobre los argumentos vertidos en el debate de audiencia de vinculación a proceso, para comprobar la probable participación de Arzate Meléndez en los hechos denunciados. Acompaña la relación de pruebas de cargo con una simple manifestación de que “fueron aportadas por servidores públicos”. Es decir, únicamente atiende, como en el sistema inquisitivo, a la naturaleza de autoridad de la fuente de la prueba para considerarla válida, mas no a una argumentación o valoración de la prueba como lo establece la legislación procesal penal.

13. Ante las denuncias concretas de tortura formuladas por Arzate Meléndez, la Jueza de Garantía se limitó a responder que “debía verlas con su abogado”. De esta manera, trasladó la carga de la prueba a quien alegaba haber sido torturado y a su defensor para la efectiva comprobación de la tortura. Consideró inverosímil que alguien formule una confesión falsa y que era difícil de creer que los militares le hubiesen coaccionado. De esta manera, convalidó la confesión falsa sin un análisis exhaustivo de la carpeta de investigación. Se negó a ejercer las facultades a su alcance para establecer la nulidad de la prueba obtenida con violencia física y moral.

14. De conformidad con el artículo 36 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, al encontrarse controvertida la declaración autoincriminatoria como fruto de coacción, la Jueza ya no podía limitarse al análisis de los argumentos vertidos por las partes, sino que tenía la obligación de revisar la carpeta de investigación, lo que no hizo.

15. Ante la pregunta de Arzate Meléndez de si era legal o no que le sacaran por las noches del CERESO sin autorización judicial alguna para llevarle a las instalaciones militares para ser torturado, la jueza se limitó a responder que “eso lo debía ver con su defensor” y no dispuso ninguna acción concreta para evitar dichas irregularidades. La jueza no adoptó ninguna medida judicial tendente a salvaguardar y proteger los derechos humanos del imputado ni a garantizar la nulidad de la prueba ilícita.

16. Un recurso de amparo (recurso 94/2011) contra el auto de vinculación a proceso por el homicidio múltiple de Villas de Salvárcar fue denegado el 19 de mayo de 2011 por el Juez Noveno de Distrito del Estado de Chihuahua, Carlos Carmona García. Dicho Juez mantuvo el mismo razonamiento formalista que la Jueza de Garantía estatal, despojando así a Arzate Meléndez de un recurso efectivo, sencillo e idóneo, para defenderse contra los abusos de las autoridades militares. El recurso de amparo se fundamenta en la violación de

las garantías de esta persona al debido proceso en virtud de una deficiente revisión judicial de la prueba.

17. El Juez de Distrito otorgó preeminencia a pruebas preconstituidas por la Fiscalía, soslayando que dentro de un sistema procesal penal oral acusatorio se debe tomar solamente en cuenta lo desahogado ante una autoridad judicial, particularmente el resultado del debate oral, en el que el dato de prueba consistente en la confesión se encontraba claramente controvertido. De la misma manera, el juez tuvo por cumplida la garantía de una defensa adecuada por la mera protesta del cargo de los defensores públicos. Arguye el juez que el hecho de formular una confesión al interior de una instalación militar no significa que sea inverosímil o ilegal. Contra dicha denegación de amparo se interpuso, el 2 de junio de 2011, recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado anteriormente mencionado.

18. La fuente denuncia diversas irregularidades en los procesos penales seguidos contra Arzate Meléndez:

a) La audiencia de vinculación de proceso por el delito de posesión de auto robado fue realizada sin su presencia;

b) Fue ilegalmente trasladado del CERESO a las instalaciones militares, donde fue sometido a torturas y vejaciones;

c) Tanto Arzate Meléndez como su coimputado, José Dolores Arroyo Chavarria, denunciaron las torturas sufridas ante la jueza Anabel Chumacero Corral. Sin embargo la jueza se negó a dar trámite a las denuncias, a corroborar las lesiones infringidas y a dar vista al Ministerio Público, como era su deber según la ley;

d) Cuando Arzate Meléndez se encontraba ya durante más de un año en prisión preventiva, la autoridad judicial le dictó irregularmente una medida de arraigo por tres meses adicionales;

e) Los defensores de oficio de Arzate Meléndez no se entrevistaron con él; se abstuvieron de hablar durante las audiencias y no le asesoraron en ningún momento. Se abstuvieron también de sustentar la denuncia de torturas que Arzate Meléndez sometió a la jueza y de presentar las pruebas correspondientes. En ninguno de los dos procesos los abogados de oficio interpusieron recurso alguno ante resoluciones y decisiones judiciales ilegales o arbitrarias.

19. El 31 de agosto de 2011, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México emitió su Recomendación N.º 49/2011, confirmando las torturas que habrían sido infligidas a Arzate Meléndez; su traslado ilegal del CERESO hacia las instalaciones del 20.º Regimiento de Caballería Motorizada cuando se encontraba ya a disposición de la juez; y su retención ilegal en instalaciones del ejército. Se pudo comprobar que esta persona presentaba una amplia zona de quemaduras por corriente eléctrica en el tórax posterior; otra amplia zona de quemaduras desde la región intraclavicular derecha hasta el hipocondrio derecho; y 12 quemaduras en la región pubiana; así como una amplia zona de contusión en ambas piernas. La Comisión no se pronunció sin embargo sobre el carácter arbitrario de la detención de Arzate Meléndez.

20. La fuente considera que la falta de eficacia en las investigaciones sobre el homicidio múltiple de Villas de Salvárcar ha redundado en la obtención de confesiones mediante las prácticas de detenciones arbitrarias y torturas. Objeta también la participación de militares en detenciones de ciudadanos civiles; el mantenimiento de detención incomunicada en sus instalaciones y las torturas. Según la fuente, mientras se detiene y tortura ilegalmente a inocentes, se deja sin castigo a quienes son los verdaderos culpables de la comisión de hechos delictivos, lo que lleva a una nueva victimización de los ofendidos y a la generación de impunidad.

21. Según la fuente, la detención de Arzate Meléndez es arbitraria, pues se ha violado su derecho al debido proceso y a la igualdad de armas entre la acusación y la defensa.

22. La fuente concluye que este caso muestra cómo el sistema procesal penal oral acusatorio está siendo incumplido y manipulado en el Estado de Chihuahua en un contexto de abusos militares y uso de la tortura y de detenciones arbitrarias, con un resultado de generalización de la impunidad.

23. La fuente ha expresado su temor por la vida y la integridad física y psíquica de Arzate Meléndez, quien se encuentra actualmente en detención bajo arraigo en las instalaciones de una antigua academia estatal de policía.

Respuesta del Gobierno

24. El Gobierno anunció que solicitaría un plazo adicional para evacuar la respuesta a las alegaciones de la fuente que le habían sido transmitidas por el Grupo de Trabajo, pero la solicitud no fue presentada. En todo caso, el Grupo de Trabajo no habría podido aceptarla en razón de haber ya vencido, el 9 de noviembre de 2011, el plazo para la respuesta establecido en los métodos de trabajo. Tampoco se invocaba una motivación de acuerdo a esos métodos. En ausencia de respuesta del Gobierno, el Grupo de Trabajo debe emitir su Opinión respecto de la privación de la libertad de Israel Arzate.

Consideraciones del Grupo de Trabajo

25. En su presentación la fuente manifiesta que el Sr. Israel Arzate Meléndez fue detenido en la calle, por militares, en la ciudad de su domicilio, tras lo cual fue transportado a un regimiento militar; que tanto en el trayecto como en el Regimiento militar fue torturado, obligándosele a reconocer su responsabilidad en una masacre de 15 personas, y en una tentativa de homicidio de otras 10 personas. Aparentemente se le confundió con otra persona, que se llamaría Carlos Madrigal. Se le acusó también de robo de un vehículo. Lograda su confesión, fue presentado ante el Ministerio Público, que asumió la confesión como prueba, lo que también hizo posteriormente la jueza a cargo de la instrucción. La detención —según los militares— fue realizada sin orden de aprehensión con el argumento de haber sido Arzate Meléndez sorprendido en flagrancia.

26. Su familia sólo supo de su privación de libertad cuando le vio como inculcado en la prensa local de Ciudad Juárez. A consecuencia de su confesión, se le impuso la medida de detención preventiva y fue imputado por las masacres y robo mencionados, siendo trasladado a un Centro de Rehabilitación Social (CERESO).

27. La jueza de garantía del caso, Bravos Anabel Chumacero Corral, dictó auto de vinculación a proceso, sin un estudio a fondo del expediente, y desestimó las alegaciones de tortura que estaba en la obligación de investigar, sosteniendo que ése era un problema del abogado defensor y no de ella. Incluso, ante los reclamos de la defensa de Arzate Meléndez porque en las noches éste era sacado ilegalmente del CERESO y llevado sin orden judicial al Regimiento militar en que fue torturado, ella sostuvo que no se trataba de un problema de su incumbencia.

28. El recurso de amparo interpuesto por la defensa fue declarado sin mayor consideración sin lugar por el Juez competente, resolución confirmada por el tribunal colegiado superior. Arzate Meléndez careció, por lo tanto, del derecho a un recurso efectivo para recuperar su libertad y tener acceso a un juicio justo, que le acuerdan el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el párrafo 3 del artículo 2 y el párrafo 4 del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

29. Respecto del cargo del robo de vehículo, el Ministerio Público lo presentó, luego lo retiró por falta de pruebas, y finalmente se vio obligado a reponerlo, pues era la única

explicación que podría justificar flagrancia y cubrir la detención con una cierta apariencia de legalidad formal, revelando todo ello una falta de seriedad en el proceso.

30. Según los militares aprehensores, el Ministerio Público y la jueza, Arzate Meléndez fue capturado en flagrancia, hecho inverosímil, pues fue detenido en la calle, mientras se dirigía de su centro de trabajo hacia su domicilio el 3 de febrero. Se le vinculó con dos masacres —una consumada, otra tentada— que habían ocurrido el 30 de enero. La descripción de la flagrancia en el Código Penal no permite considerar esta aprehensión como en delito flagrante.

31. Ante la ausencia de pruebas reales, y ante la debilidad de algunas otras, y luego de más de un año de detención preventiva, la autoridad judicial recurrió a un procedimiento que ha sido considerado arbitrario y contrario a las normas internacionales de derechos humanos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y los abogados; el Consejo de Derechos Humanos durante el examen periódico universal de México; y gran parte de las organizaciones mexicanas de derechos humanos: Se trata del arraigo, consistente en la privación de libertad en lugares especialmente habilitados que un juez puede disponer, a petición del Ministerio Público, con el objeto de reunir información para el esclarecimiento de un delito. Esta facultad estaba originalmente incluida en textos simplemente legales sobre delincuencia organizada, y ante las fundadas críticas que provocaba tanto su existencia, como el abuso de ella, en cuanto a su carácter inconstitucional, se decidió en 2008 elevarla a rango constitucional.

32. Si alguna duda pudiese haber sobre la veracidad de los dichos de Arzate Meléndez, y especialmente, sobre las alegaciones de tortura, ella se disipa luego de la contundente Recomendación N.º 49/2011 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México. Esta Recomendación hace suyas las alegaciones de Arzate Meléndez sobre torturas; sobre su traslado nocturno e ilegal a instalaciones militares sin autorización de la jueza; y sobre todo, corrobora las quemaduras por corriente eléctrica en el tórax posterior y en la región intraclavicular derecha hasta el hipocondrio derecho, en la región pubiana, además de contusiones en ambas piernas.

33. Por otra parte, las masacres alegadas y de las que se ha acusado a Israel Arzate Meléndez siguen en la impunidad.

34. Además de las irregularidades en el proceso ya mencionadas, Arzate Meléndez no ha gozado de un juicio justo. Ni la jueza de garantía ni el tribunal colegiado superior actuaron con la independencia e imparcialidad exigidas a sus cargos al determinar la privación de libertad y la permanencia de la detención. Incluso, la audiencia de vinculación al proceso por el supuesto robo del vehículo se realizó sin la presencia del inculcado, no habiendo sido, por lo tanto, oído públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación en su contra en materia penal, como lo ordenan el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el párrafo 1 del artículo 14. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

35. Tampoco el Sr. Arzate Meléndez estuvo libre de tortura, y, además, fue obligado a declarar contra sí mismo y a confesarse culpable, en transgresión de lo dispuesto en el artículo 7 y el inciso g) del párrafo 3 del artículo 14 del Pacto.

36. Arzate Meléndez no fue defendido por un abogado de su elección, como lo exige el inciso d) del párrafo 3 del artículo 14 del Pacto, sino por abogados de oficio que no denunciaron las torturas que había sufrido; no hicieron uso de la palabra durante las audiencias, ni interpusieron recursos para impugnar las irregularidades denunciadas.

Opinión del Grupo de Trabajo

37. En mérito a lo expuesto, el Grupo de Trabajo, considerando que las violaciones de las normas internacionales sobre el derecho al debido proceso y a un juicio justo son de una gravedad tal que otorga a la privación de libertad un carácter arbitrario, emite la siguiente Opinión:

a) La privación de la libertad del Sr. Israel Arzate Meléndez viola los derechos humanos consagrados en los artículos 3, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y el párrafo 3 del artículo 2 y los artículos 3, 7, 9, 10 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y en consecuencia es arbitraria según la categoría III de los métodos de trabajo del Grupo de Trabajo;

b) Consecuente con la Opinión emitida, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos que disponga la libertad inmediata de Arzate Meléndez;

c) Pide también al Gobierno que disponga una investigación exhaustiva, independiente e imparcial de las denuncias de torturas que sufrió Arzate Meléndez;

d) Pide además al Gobierno que conceda a Arzate Meléndez una reparación completa y adecuada por los daños y perjuicios sufridos;

e) Pide al Gobierno que derogue las disposiciones constitucionales y legales que contemplan la institución del arraigo, conforme lo han venido solicitando el Grupo de Trabajo desde 2002¹; la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados²; el Consejo de los Derechos Humanos durante el examen periódico universal de México³ y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros. Y, asimismo, proponga precisiones a las normas legales relativas a la flagrancia, para impedir el abuso de ella, como lo ha constatado este Grupo de Trabajo en este y otros casos;

f) Pide también al Gobierno que suprima la facultad otorgada a las Fuerzas Armadas de participar en la investigación y persecución de hechos delictuosos, y prohíba que practiquen aprehensiones, arrestos y detenciones de civiles, pues las Fuerzas Armadas no tienen ni deben tener funciones policiales.

g) Invita al Gobierno a mantener su cooperación con el Grupo de Trabajo, proporcionándole oportunamente las informaciones que éste requiere para el cumplimiento de su mandato.

[Aprobada el 24 de noviembre de 2011]

¹ Véase informe del Grupo de Trabajo sobre su visita a México (E/CN.4/2003/8/Add.3).

² Véase informe de la Relatora Especial sobre su visita a México (A/HRC/17/30/Add.3).

³ Véase A/HRC/11/27